

Metodologías de los procesos de paz

Por Juan Sebastián Betancur Escobar¹

Resumen: el texto hace un detallado recorrido por los diversos procesos de paz que se enfrentado en el país en los últimos setenta años y, desde la experiencia personal, presenta unos elementos que se consideran fundamentales a la hora de llevar adelante procesos de esta naturaleza, siempre tan maleables y muchas veces sujetos al fracaso por las razones más complejas, pero también más triviales.

Palabras clave: procesos de paz, guerrillas, insurgencia armada, historia política de Colombia siglo XX

Abstract: the text provides a detailed overview of the various peace processes that have been confronted in the country over the last seventy years and, from personal experience, presents some elements that are considered fundamental when carrying out processes of this kind. nature, always so malleable and often subject to failure for the most complex reasons, but also more trivial.

Key words: peace processes, guerrillas, armed insurgency, political history of Colombia XX century

1 Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, gerente de la Andi, presidente de Telecom, presidente de Anda y vicepresidente de la Suramericana de Seguros. Presidente de Proantioquia entre el 2005 y el 2013, cuando fue nombrado embajador en Italia. Ha sido asesor en temas relativos a la paz de varios gobiernos nacionales.



En 1984 como miembro de la Comisión de Verificación de Paz, que se instaló dentro de los Acuerdos de Negociación con Las FARC en la Uribe, Meta, tuve la oportunidad de visitar al Comando Central de las FARC en la llamada Casa Verde. A este lugar llegué con los demás miembros de la Comisión, y teniendo por fortuna a mi lado al general Gerardo Ayerbe Chaux, presencié lo siguiente:

Dirigiéndose a Marulanda le dijo:

—¿Usted es Manuel Marulanda?

—Sí, contesta el otro.

—Tengo una curiosidad, Manuel, ¿cómo fue que se me escapó usted en el año 64, cuando lo tenía acorralado en el Huila?

Este le contestó: —Yo logré fugarme porque sus tropas no saben caminar en el monte y ustedes no conocen bien la geografía. A raíz de ello, fundé otro frente de combate.

Este diálogo lo ilustró Marulanda con los trazos que hacía con la rama de un árbol sobre el terreno arenoso de la Casa Verde, donde mostró la geografía del enfrentamiento con las tropas del general Ayerbe.

Luego de las sesiones de trabajo de ese día, se descansó en el campamento. Ya al amanecer, salí a caminar y de nuevo me encontré con el general Ayerbe. Le pregunté:

—¿General, usted porqué está aquí iniciando estos diálogos?

Me respondió que el ejército colombiano no debe seguir desgastándose en este conflicto armado, porque lo desvía de sus funciones esenciales que son la protección de la soberanía nacional y el cuidado de las fronteras, tareas que no se pueden llevar a cabo cuando las tropas están regadas en todo el territorio, ya que se dispersa la unidad de mando.

Por lo tanto —agregó—, hay que intentar la vía de la negociación política como fórmula óptima de la resolución de estos conflictos internos.

Se me ha invitado a este importante recinto, para proponerles a ustedes un diálogo sobre las metodologías de los procesos de paz. Me circunscribiré a

los recientes acuerdos con las FARC en la Habana y con el ELN tanto en Quito como en la Habana, que están hoy aún sin concluir.

Abro el tema con la siguiente premisa: las metodologías de los procesos de paz se empiezan a construir desde el mismo momento en que un gobierno se compromete a llevarlos a cabo, y cada negociación tiene sus propias características según las circunstancias, como lo enunciaremos más adelante. Pero teniendo muy clara la finalidad de esas negociaciones, como es principalmente resarcir a las víctimas y, por supuesto, dejar y entregar las armas y abandonar todo lo que implique acciones delictivas, el compromiso de no repetición e incorporarse a la vida civil y política del país.

En la actualidad hay que tener en cuenta los elementos históricos, geográficos, antropológicos, culturales, económicos, judiciales, y la importancia del idioma y del manejo del lenguaje y sus significaciones, para poder diseñar, desde diálogos constructivos, distintas políticas que conduzcan a elaborar una agenda de negociaciones posible de comunicar con claridad. A partir de allí, definir desde el principio cuáles temas se pueden negociar y cuáles no.

Así, no es negociable el modelo de Estado. Tampoco las normas centrales que tienen que ver con la fuerza pública, ni la unidad de territorio ni los fundamentos de la democracia ni la impunidad total.

Sí son negociables el acceso a la propiedad privada, tanto de la tierra rural como de otros activos de la sociedad. El acceso a la educación y al conocimiento, y el establecimiento de una justicia de transición, tal como lo contempla el derecho internacional, siempre y cuando se den la dejación total de las armas, la reivindicación de las víctimas y el compromiso de no repetición. En pocas palabras, cómo se gestiona un territorio, cómo se diseña una salida política, cómo proponer una verdadera política de fronteras, cómo fortalecer todo el arco de la educación, principalmente el de la infancia en el campo. No podemos perder de vista que el mundo del magisterio rural está permeado por organizaciones subversivas y criminales.

Antes de situarnos en el presente, vale la pena hacer un breve repaso histórico de lo acontecido en el siglo XX y lo que va del XXI, para resaltar que el mal manejo de la manera como se ocupa el territorio rural en Colombia ha sido fuente de los más grandes conflictos armados del país, desde la Guerra de

los Mil Días hasta el día de hoy. Como se verá más adelante, el primer punto de los acuerdos de La Habana trata precisamente el tema agrario, y sigue reposando sin avanzar en el Congreso de la República.

Repaso histórico para concluir que violencia y ocupación de la tierra están íntimamente ligados

Veamos, el siglo xx se inicia con el final de la Guerra de los Mil Días, que le dio el triunfo al gobierno conservador de turno, y la pérdida de Panamá. El desastre de esa guerra generó una movilización grande de la población, estimulando accesos desordenados como una especie de colonización forzada.

Así se llega a los años treinta, cuando se da la denominada Revolución en Marcha, que enfrenta el tema de las tierras. Ya se había presentado la conocida matanza de las bananeras en Ciénaga, departamento de Magdalena en diciembre de 1928.

Terminado ese período liberal de 1934 a 1946, se inicia una nueva etapa conservadora, cuyo hecho más tristemente lamentable es el del 9 de abril de 1948, a partir del cual se recrudece la violencia liberal-conservadora.

En 1953 un sector conservador junto con el Partido Liberal y elementos sobresalientes del sector empresarial acompañan un golpe de Estado al presidente Laureano Gómez, y se posesiona el general Gustavo Rojas Pinilla. Pero, en 1957, los mismos agentes de la sociedad que estimularon aquel golpe de Estado promueven la renuncia del dictador Rojas Pinilla.

Se constituye una Junta Militar que convoca un plebiscito y nace el Frente Nacional, una forma de gobierno compartida entre liberales, orientados por Alberto Lleras Camargo, y conservadores, bajo el liderazgo de Laureano Gómez, aquel que había sido depuesto, y otros líderes conservadores. Se excluyen otras formas de expresión política. El propósito era lograr la paz entre los partidos tradicionales.

Cabe anotar acá que efectivamente se logra el pacto entre los líderes de los dos partidos, desconociendo las bases campesinas y obreras tanto del campo como de las ciudades, produciendo distorsiones tan profundas que lo que se denominaba antes guerrillas liberales se empieza a llamar, dentro del Frente

Nacional, “los bandoleros”, germen de lo que después se conoció como “las guerrillas”. Tengamos presente que este juego político se hace en un ambiente de absoluta impunidad.

Todo este período del siglo xx se caracteriza por un desarrollo rural desorganizado, con una colonización forzada que replegaba a los campesinos a la periferia y por lo tanto una altísima precariedad en los títulos de propiedad.

Inicio del Frente Nacional con el objeto de darle paz a Colombia (1958-1974)

- Primer gobierno: Alberto Lleras 1958-1962.

Se inicia una negociación con las guerrillas liberales. Se expide la ley 135 de 1961 que establece la reforma agraria y crea el INCORA. Esta política, apoyada por el presidente Kennedy desde Washington, es un desarrollo de la llamada Alianza para el Progreso. Además, coincide con el triunfo de la Revolución cubana.

- Segundo gobierno: Guillermo León Valencia 1962-1966.

Se debate sobre las “repúblicas independientes”, como las llamó Álvaro Gómez, que fueron los territorios refugio de las guerrillas liberales y comunistas. Se bombardea a Marquetalia, y nacen las FARC, y el ELN. Nótese que, en menos de dos períodos presidenciales del Frente Nacional, aparece un tipo de violencia más compleja, y sigue el tema de la tierra sin solucionarse.

- Tercer gobierno: Carlos Lleras 1966-1970.

Con el arrojo que caracterizaba al doctor Lleras, se revive la reforma agraria y se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), a fin de darle visibilidad a la población rural y hacerlos partícipes de la reforma agraria. Se hace la reforma constitucional de 1968, y aparece el feroz debate contra el gerente del INCORA y el gerente del IFI del senador costeño José Ignacio Vives, quien, con clara complacencia de los propietarios de tierras de la Costa Caribe, como del resto del país, le hace un daño irreparable a la política de reforma agraria y al INCORA.

Lleras convoca a elecciones como le correspondía y siempre existirá la duda de si las ganó o no la ANAPO, el amplio movimiento popular liderado por Rojas Pinilla, ¡oh paradoja!, aquel militar que había sido presidente y dictador, gracias al apoyo de una parte de los partidos tradicionales y del sector empresarial colombiano e incluso de movimientos estudiantiles en el año 53. Ese movimiento estaba constituido en buena parte por los excluidos del Frente Nacional.

- Cuarto gobierno: Misael Pastrana Borrero 1970-1974, quien se posesiona dentro de ese ambiente enrarecido por las elecciones.

En materia rural, durante este gobierno, se crea una comisión evaluadora de la reforma agraria a la cual asistí como asesor. El presidente Pastrana, con razón, después del debate del senador Vives, entendió la necesidad de estudiar qué estaba pasando con este tema. En consecuencia, con los informes recibidos, se presenta un nuevo proyecto de ley de reforma agraria que se conoce como el Acuerdo de Chicoral.

Se ha dicho que es en este momento histórico en el que naufraga la Reforma Agraria Colombiana. Yo creo que no. Ya había colapsado desde el debate del senador Vives.

Lo que sí es cierto es que en ese período no se le dieron los recursos necesarios al INCORA para seguir con sus políticas redistributivas, a pesar de que en la nueva ley, entre otras, se fortalecen las empresas comunitarias y se crea por primera vez la renta presuntiva de la tierra. El presidente Pastrana basó su plan de desarrollo en la financiación de vivienda a través del mecanismo UPAC.

Pero el gran evento político es la aparición de un nuevo movimiento subversivo, el M-19. Ya tenemos tres grandes actores armados: las FARC, el ELN y el M-19, así como otros más reducidos como el EPL, el Quintín Lame y el ADO.

Hay que reconocer los logros que se han alcanzado en materia económica y social durante el Frente Nacional, sobre todo el desarrollo del sector financiero, de la construcción, del comercio, y la producción de materias primas, la minería y productos agrícolas sin procesar. Ello no está en discusión.

Resalto solo que, en materia de tranquilidad pública, desarrollo rural integral y equidad, el avance fue casi nulo.

El Frente Nacional cierra su capítulo agrario con una movilización grande de campesinos invadiendo tierras.

A continuación, el presidente López Michelsen denomina su política agraria Desarrollo Rural Integrado (DRI), para los humoristas, Desmonte Rápido del INCORA. La ola de violencia se recrudece drásticamente.

Entre 1978 y 1982, el gobierno del presidente Turbay propone el Estatuto de Seguridad. Sucede el robo de armas del ejército, el asalto a la embajada de la República Dominicana, y la guerrilla del M-19 se va con un millón de dólares a Cuba. Meses después desembarcan en el Chocó. Les fue mal. Pero el tema rural y de tierras sigue ahí. Turbay levanta el estado de sitio antes de terminar su período.

Entre 1982 y 1986, Belisario Betancur revive la necesidad de una negociación de fondo con las guerrillas. Para ello tuvo la siguiente metodología: planteó una ley de amnistía que fue aprobada por el Congreso con solo dos votos negativos, es decir, se vislumbraba un gran apoyo político.

Acudió a la comunidad internacional, no para que le ayudaran a negociar, por cuanto estaba convencido de que era un problema interno, pero sí para que lo acompañaran en la solución, cuando se concretaran dichos acuerdos.

En este contexto se diseñó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), financiado y apoyado por las Naciones Unidas, se planteó y se sacó adelante la elección popular de acaldes, y se estimuló la creación de un nuevo partido político denominado Unión Patriótica (UP).

Sin embargo, toda esta arquitectura institucional, que contenía las principales estrategias políticas y metodológicas para llegar a un resultado exitoso, fue poco a poco perdiendo el apoyo de las fuerzas armadas, del sector empresarial y de la sociedad civil en general.

Es notorio el miedo que se generó en los jefes políticos locales, regionales y aún nacionales, ante la aparición de la UP, lo cual estimuló alianzas perversas con las denominadas autodefensas o paramilitares.

Naturalmente las fuerzas oscuras del país, ante esta debilidad, se atrevieron a tomar por asalto el Palacio de Justicia y se aliaron con ciertos caudillos locales para frenar las posibilidades de ese nuevo partido. Se inicia así la

masacre de sus miembros y desaparece la UP. En consecuencia, en materia agraria tampoco se pudo avanzar mayormente durante el gobierno Betancur.

Entre 1986 y 1990 el presidente Barco continúa con entusiasmo la política del PNR. Su gobierno sufrió golpes cruentos como el asesinato de Luis Carlos Galán y de otros líderes políticos y el secuestro de Álvaro Gómez.

En lo positivo, Barco plantea una reforma constitucional que finalmente se llevó a cabo en el gobierno siguiente. A solicitud del M-19, con posterioridad al asalto al Palacio de Justicia y a la liberación de Álvaro Gómez, se abre una negociación con este grupo insurgente. Se les otorga el indulto por parte del Congreso de la República, y es así como la metodología en este caso es pactada a partir de dicho momento.

No se presentaron grandes compromisos de políticas públicas, tan solo se incorporaron sus integrantes rápidamente a la vida civil y política, hasta llegar en el gobierno de Gaviria a la Constituyente de 1991.

Quiero resaltar que el indulto que se le concedió al M-19 fue apoyado por líderes políticos que en la actualidad se oponen a los temas de la justicia transicional pactados en La Habana.

Pero el tema de la tierra sigue sin tocarse y la violencia sigue cobrando más fuerza. Aparece el drama del narcotráfico con mucha intensidad, que no es otra cosa que una organización criminal que tiene o ha tenido las características de una fuerza de ocupación. Este nuevo elemento de los cultivos ilícitos en el mundo rural distorsiona todo lo que sucede en la sociedad colombiana.

En el gobierno Gaviria, en 1991, se intenta en distintos territorios negociar con las guerrillas, pero sin éxito alguno. Se convoca una constituyente presidida por el Partido Liberal, el M-19 y el Partido Conservador. Es de anotar que ni las FARC ni el ELN participaron en estas discusiones de la constituyente.

Samper quiso hacerlo con el ELN, tanto en el exterior como en Colombia, también sin suceso alguno. En su gobierno, sin embargo, se intentó profundizar los temas de distribución de tierras.

Quiero reseñar, en este período de Samper, una muy valiosa experiencia que me tocó vivir en materia de metodologías, aquella diseñada por el profesor canadiense Adam Kahain, que se denominó DESTINO COLOMBIA 1997.

En síntesis, el ejercicio consistió en reunir personas representativas de los distintos sectores de la sociedad, a saber: partidos políticos de todas las ideologías, líderes campesinos y sindicales, empresarios, la Iglesia, representantes de la cultura, del periodismo, de la academia, de las fuerzas armadas, de la guerrilla y de los paramilitares. Todos ellos con el propósito central de ver a Colombia treinta años adelante después de las negociaciones con las guerrillas.

Se establecieron cuatro escenarios que los asistentes denominaron así:

“Amanecerá y veremos”, aquel del caos donde no se negocia ni se hace nada.

“Más vale pájaro en mano”, cuando se hace una negociación a medias, que produce decepción.

“Todos a marchar”, cuando llega un gobierno de mano dura que genera tal entusiasmo que se pide hacer una reforma constitucional para que haya reelección.

Y por último, “La unión hace la fuerza”, cuando se empiezan a ver fallas grandes en el respeto a los derechos humanos, se agota el escenario anterior y se pide un cambio para hacer una negociación seria hacia la convivencia.

Este ejercicio fue también, como tantos otros, promovido por la organización empresarial, lo mismo que la Fundación Ideas para la Paz, la Corporación Excelencia de la Justicia y Empresarios por la Educación. Y, en lo regional, la Unión Vallecaucana, PROBARRANQUILLA, PROANTIOQUIA, y ahora PROBOGOTÁ.

Andrés Pastrana se propuso desde el primer día de su gobierno impulsar las negociaciones con las guerrillas, para lo cual despejó la zona del Caguán. Desafortunadamente, también hubo una frustración en ese caso “MÁS VALE PÁJARO EN MANO”.

Valga recordar que, en ese entonces, aparecen con mucha fuerza, en la disputa por la tierra, los llamados paramilitares, que, desde hacía varios años, confrontaban a la guerrilla y asesinaban campesinos que consideraban de izquierda. Su gran motivo era el control del cultivo de la hoja de coca.

Con el presidente Uribe, que con toda franqueza manifestó en su campaña que no creía en las negociaciones políticas con la guerrilla, “TODOS A MARCHAR”, sucedió que, cuando fue electo, los miembros de la Fundación Ideas para la Paz le pedimos una cita para informarle lo que hacíamos por el país.

Allí perfectamente se podían ver las distintas metodologías para una negociación política por la paz.

Hay que decirlo, tanto el presidente Uribe como el señor Luis Carlos Restrepo, su jefe de negociaciones, quedaron sorprendidos por la cantidad de información valiosa que posee dicha institución.

Este interés por la Fundación duró más bien poco y quienes sí realmente nos llamaban con frecuencia eran las Fuerzas Armadas y las distintas embajadas interesadas en el tema como Estados Unidos, Inglaterra, Noruega Suecia y América Latina.

Lo de las Fuerzas Armadas era muy importante por cuanto ellos mismos nos comentaban que después de operativos exitosos contra la guerrilla, era necesario que el resto del Estado llegara con sus políticas y acciones de desarrollo a dichos territorios.

Personalmente tuve la oportunidad de escribir un documento al Banco Mundial sobre cuál podría ser la participación del sector empresarial para apoyar la política de reinserción del paramilitarismo que el presidente Uribe planteó. El documento tuvo mejor suerte en las embajadas ya mencionadas.

La verdad es que, del proceso de negociación con las autodefensas, no quedo ningún documento relevante para el conocimiento del país. Sí se encontraron algunos documentos sobre el intento de negociación con el ELN que sucedió en La Habana. Con las FARC existió intención de hacerlo, pero esta organización no se prestó.

Tal vez, valga la pena registrar el desconcierto regional que sufrimos; yo estaba al frente de PROANTIOAQUIA cuando el Gobierno nacional envió primero al municipio de La Ceja, y luego a Itagüí, a todos los grandes capos del paramilitarismo, más de 40, traídos desde Santa Fe de Ralito.

Desconcertante, porque recuerdo haberle preguntado al comandante de la policía de la época cómo se iba a manejar esta situación y cuántos escoltas estarían pendientes de estos sujetos afuera de la cárcel. Él no lo sabía con exactitud, pero calculó 20 cada uno. Yo le respondí que con tan solo 10 tendríamos en el Valle de Aburrá más de 400 individuos armados hasta los dientes. Ese peligroso control territorial en el Valle de Aburrá parece seguir aún vigente.

En cuanto al presidente Santos, con seguridad cada uno de ustedes tiene una idea formada en relación con su gobierno, y no es mi papel aquí ni defenderlo ni atacarlo.

Pero sí, de acuerdo con la invitación que se me ha hecho, debo decir que, admitiendo todas las fallas justas o injustas que se le adjudican a la negociación de La Habana, no se puede negar, sin embargo, que hubo una preparación concienzuda, y se debe reconocer que, infortunadamente, las críticas, que por supuesto eran necesarias, sobre cada uno de los planteamientos de ese proceso no han sucedido con la seriedad que el tema merece.

Negociaciones con las FARC en La Habana

Con seguridad no ha habido negociación, al menos en Colombia, con grupos guerrilleros, que esté tan documentada como la que se llevó a cabo en La Habana en el gobierno anterior.

Poco antes de terminar el gobierno, se entregaron 10 gruesos tomos con toda la documentación y pormenores que dan cuenta de todo el proceso para llegar a la dejación de armas, de los compromisos adquiridos de parte y parte y de la participación de la comunidad internacional, en especial de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.

Igualmente se destaca la presencia de la Unión Europea, el Vaticano, entre otros, y de los organismos multilaterales de América Latina.

La fuerza pública fue protagonista durante muchos años del siglo xx y, por fin, en las negociaciones de La Habana, se le dio espacio para que sea protagonista de un proceso de paz para que sus logros militares se puedan incorporar al relato histórico de una sociedad democrática, y no como episodios sueltos de ejercicio de la fortaleza armada.

Todavía estamos a tiempo de recuperar el rumbo para que, si hubo errores en el pasado, estos puedan ser corregidos, pero manteniendo siempre como un proceso central de esta naturaleza a las víctimas, y su resarcimiento. Por supuesto, evitar la repetición de la violencia es propósito fundamental.

Para ello es definitivamente inaplazable abocar una política seria de desarrollo rural, que permita no solo el acceso a la tierra y su explotación debida, sino

el acceso al conocimiento, a la cultura y a lo cultural, para la recuperación de los valores de los distintos entornos, con especial énfasis en educación infantil y capacitación de la juventud y los mayores.

Conclusiones

No olvidemos que la Constitución que nos rige, en su artículo 22 expresamente dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Pero, además, siempre he creído que la calidad de una democracia se debe calificar por los aciertos o desaciertos de un gobernante, y por la seriedad y veracidad de los argumentos de la oposición.

Además, después de este brevísimo relato de lo que ha sucedido en Colombia, es acertado afirmar que los conflictos violentos a lo largo del siglo xx, y lo que lleva el xxi, son reales, que es la premisa mayor para diseñar una metodología de diálogos con la contraparte. Lo mismo que una metodología para avanzar en las mesas de trabajo.

Si examinamos bien lo vivido durante la vigencia de la institución del estado de sitio, podemos observar que la Justicia Ordinaria fue más bien la excepción. Por lo tanto, es preferible una justicia transicional cierta que una justicia transaccional inestable.

Se percibe una extraña oposición a la modernización del campo, que tendrá que empezar con el reconocimiento de los títulos de propiedad.

Precisamente el ministro de Agricultura del gobierno anterior, Juan Camilo Restrepo, logró la aprobación de dos leyes fundamentales, una sobre restitución de tierras y otra sobre reconocimiento a las víctimas. Estas fueron parte de la metodología para elaborar la agenda de La Habana.

He mencionado resumidamente estos elementos históricos, para resaltar que el común denominador del tema de nuestra violencia es la carencia de políticas serias de ocupación del territorio.

Para lograr poner en marcha este tipo de políticas y reconocimiento de los problemas históricos de Colombia, donde de verdad tenemos un conflicto armado, es necesario el reconocimiento internacional, pero, sobre todo, el apoyo interno.

Creo que no cabe duda tampoco que, si queremos un país moderno, serio, incluyente, en donde el Estado de derecho esté en cada uno de los rincones del Colombia, tenemos que abordar a fondo los temas de la ocupación territorial, el cuidado del medio ambiente y de la tenencia de la tierra, para proteger los derechos de propiedad y explotación que la Constitución garantiza.

La colonización brutal que los criminales han logrado hacer con la siembra de cultivos ilícitos, principalmente en parques naturales y baldíos, se ha dado justamente por una ausencia de una eficaz política de desarrollo de los territorios principalmente en las fronteras.

Este ha sido y es el gran reto que enfrenta el país entero y el campo colombiano en particular. El narcotráfico constituye, en la práctica, la amenaza que genera un ejército invasor por sus conexiones externas. Nótese que los grupos guerrilleros y las organizaciones criminales se han situado también en aquellas regiones donde existen cultivos de exportación como el café, el banano, la palma, y cerca de algunos ingenios azucareros, y por supuesto los cultivos de la hoja maldita de la coca o en explotaciones mineras como el carbón, el oro, las esmeraldas, el petróleo y el coltán.

No podemos olvidarnos de los peligrosos grupos que se han asentado alrededor de las grandes hidroeléctricas, es decir, la explotación del agua, como ya sucedió en el Oriente antioqueño.

Recordemos lo acontecido en Italia después de la guerra. Un país devastado logra que los pequeños, medianos y grandes empresarios puedan trabajar armónicamente, hasta convertirse en una potencia agroalimentaria en Europa.

Ahora lo que está sucediendo es que, al esfuerzo descomunal y heroico de nuestra fuerza pública, después de asestar distintos golpes a la guerrilla y a la criminalidad, no se está sumando, dentro de esos territorios, las políticas civiles de desarrollo y justicia.

No se consolida el estado de derecho, y, por lo tanto, no se hace justicia a las víctimas del conflicto, razón principal de los Acuerdos de Paz.

En síntesis, para iniciar un verdadero proceso de desarme, de resarcimiento de las víctimas y de compromiso de no repetición, tiene que existir el apoyo de metodologías que no son otra cosa que compromisos de políticas de Estado, de desarrollo social, económico, territorial y cultural y que son

aspectos documentados en detalle en los 10 tomos que se dejaron por parte del gobierno Santos, para la consulta de la sociedad.

Tampoco sobra reiterar por qué me alargué un poco en el tema histórico, pues todos ustedes bien saben que la historia es un referente importante para construir las avenidas hacia el progreso, y por ello es trascendental proteger la manera como se construyen los relatos de todos estos fenómenos sociales.

Existe el temor de que el esfuerzo que ha hecho el Centro de Memoria Histórica, al producir tantos volúmenes con el registro de los problemas que nos han agobiado, se quiera desviar cambiando su orientación original, que no ha sido otra que la de registrar la historia de los hechos. Es bien sabido que el “negacionismo” es el peor enemigo del conocimiento de la historia y, por lo tanto, de la proyección del futuro.

El arte de la política es evitar la guerra, parar la guerra, diseñar e implementar políticas que conduzcan a evitar su recrudescimiento, y buscar mecanismos para solucionar conflictos. Para ello es necesario leer muy bien el entorno histórico y el presente.

En otras palabras, hay que recuperar el protagonismo de la POLÍTICA, como la mejor manera de proteger la integridad y la moral de nuestras fuerzas armadas, tal como me lo recordó el general Ayerbe Chaux.

Espero que estas reflexiones inviten simplemente a meditar con serenidad, porque no podemos continuar con la situación actual que es por un lado inequitativa e ineficiente y, por otro, propicia el incremento de la violencia.

Es realmente vergonzoso que la Colombia rural tenga los niveles de atraso existentes, la excesiva concentración de la propiedad, bajísimos niveles de tributación, tanto los prediales como los nacionales y bajísimos indicadores de registro de la propiedad privada.

Así mismo son lamentables los niveles de pobreza actuales, el descuido de la educación general y en particular de la infancia, los niveles de producción y productividad muy bajos, la utilización de las ciencias del conocimiento casi invisible, y la deficiente infraestructura que apoya el comercio del campesino o empresario.

Las fronteras de Colombia tienen que ver con nuestra riqueza de los bosques, y con la hídrica, tanto fluvial como marítima, y con un potencial enorme en producción agropecuaria y minera.

En fin, si queremos acercarnos a ser una Colombia moderna, hay que superar todos esos obstáculos que no tienen justificación a esta altura del siglo XXI. Si no lo hacemos, a pesar del esfuerzo valioso de grupos de empresarios pequeños, medianos y grandes que han logrado aportar a la economía rural y nacional importantes beneficios, seguiremos siendo un país atrasado, desperdiciado y proclive a la violencia.

Por lo tanto, no es aceptable que al día de hoy no se haya formulado una propuesta coherente de una política de desarrollo rural de fondo, que nos diga cómo debemos ocupar el territorio en forma legítima y socialmente útil, y cómo dejar, de una vez y para siempre, esa inercia que produce la economía rentista de la tierra.